

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 9º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-7257-2024  
CARATULADO : URZÚA/FISCO DE CHILE

Santiago, trece de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En presentación de 19 de abril de 2024 comparece el abogado Francisco Javier Amigo Cartagena, en representación de don Daniel Luis Urzúa Blanco, jubilado, con domicilio en calle Los Alerces N°709, comuna de Peñalolén, demandando en juicio ordinario de indemnización de perjuicios al Fisco de Chile, representada legalmente por el Consejo de Defensa del Estado, encontrándose este, a su vez, representado por don Marcelo Eduardo Chandía Peña, abogado Procurador Fiscal de Santiago, ambos domiciliados en calle Agustinas N°1.225, piso 2, comuna de Santiago.

Relata en primera persona Daniel Luis Urzúa Blanco, lo siguiente:

“Que a la época anterior al Golpe de Estado yo vivía con mi cónyuge, con la cual había contraído matrimonio durante el año 1970. En razón de ello y del proyecto de vida que había construido estaba lleno de esperanza por un cambio social en Chile: esos años eran un momento histórico de lucha social del cual yo me sentía parte. En este contexto nos encontró el 11 de septiembre de 1973, donde comenzó una represión brutal de la cual fueron víctimas varias personas que yo conocía.

Durante la dictadura yo me desempeñaba como diseñador gráfico y también era encargado de propaganda del Movimiento Democrático Popular, por lo cual utilizaba la imprenta que tenía en mi casa para hacer visible los atropellos a los Derechos Humanos que ocurrían a manos de los agentes estatales. Primero a través de correspondencia y luego imprimiendo propaganda conocía los peligros de la actividad que estaba desarrollando, pero como creía firmemente en lo que hacía no tenía miedo.

Los años fueron pasando, y en numerosas oportunidades durante la primera década del golpe mi domicilio era visitado por uniformados para preguntar por mí, más nunca de la forma que sucedería años más tarde. En efecto, el día 28 de Noviembre de 1984 mientras me encontraba en mi casa con mis hijos de 13 y 7 años y con mi cónyuge, un grupo de agentes de la CNI -uno de los cuales era una mujer y que tocó la puerta suavemente a eso de las 22:30 horas- entraban a mi casa violentamente, poniéndome uno de



ellos una pistola en la cabeza sin identificarse y menos exhibir orden alguna. Me acusaron de *tener una imprenta ilegal puesta al servicio del comunismo* a pesar de que exhibí todos los documentos legales que acreditaban su legalidad. Me golpearon inmediatamente e hicieron bajar a mis hijos y a mi mujer desde el segundo piso y también fueron violentos con ellos. Estos sujetos rompieron colchones, mi taller y causaron todo tipo de daños *buscando evidencia que jamás encontraron*. Lo que si encontraron fue todo el dinero que había ahorrado para cambiar la familia, una pulsera, aros, una cadena de oro y tres relojes que había heredado, todo lo cual guardaron para sí.

Al término del allanamiento ilegal los agentes llamaron a mi vecina para que firmara un papel que aseguraba que habían encontrado panfletos; al negarse aquella, la amenazaron con una pistola en su cabeza por lo que no tuvo otra alternativa que firmar esa falsedad para no ser asesinada allí mismo.

Así, me cubrieron la cabeza con una chaqueta y me subieron a la parte de atrás de un vehículo: luego de unos 15 o 20 minutos el automóvil se estacionó y me bajaron, estaba en un cuartel de la CNI que más tarde me enteraría de su nombre: el infame Cuartel Borgoño. Desde el momento que llegamos comenzaron a golpearme, estuve varios días en una celda aislado con la vista vendada, siendo amenazado constantemente *con traer a mi hija para la diversión del cuartel si es que yo no cooperaba*³.

El día después de mi detención me dijeron *que me llevarían a ver un médico*, por lo que me obligaron a acostarme en una camilla semi desnudo para después comenzar a torturarme; primero con golpes y luego conectaron varios cables a mi cuerpo, específicamente párpados, manos y testículos para proceder a mojarme y aplicarme electricidad de 220 voltios hasta que perdí la conciencia para después arrastrarme de vuelta a mi celda.

Recuerdo como saltaba frente a cada golpe de corriente y la desesperación que me generaba que aquello no terminaría nunca, pues nada sabía de lo que en ese momento se me interrogaba. La corriente también me hacía perder mis esfínteres, y la desesperación que aquello me generaba hacía que les gritase suplicándoles sin éxito que por favor se detuviesen.

Los días siguientes continuaron los interrogatorios donde dos agentes de la CNI me golpeaban constantemente. Lo hacían conmigo y con otros detenidos por turnos para descansar: mientras uno me golpeaba y humillaba el otro se tomaba un café acompañado de un cigarrillo como si se tratara de un



trabajo cualquiera. Durante una de dichas interrogaciones también se me torturaba introduciéndoseme alfileres debajo de mis uñas causándome un dolor y desesperación extremos.

Finalmente el día 02 de Diciembre de 1984 fui liberado, probablemente influenciados por el recurso de amparo interpuesto a mi favor y que rola en la carpeta del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Lamentablemente el acoso no terminó, por lo cual al cabo de dos meses tuve que salir con toda mi familia aterrorizados al exilio: primero a Mendoza y luego a Buenos Aires para terminar finalmente en Suecia, viajando solamente con un par de maletas que contenían todos nuestros recuerdos y vidas pasadas.

El exilio Vuestra Señoría fue tremendamente duro: mis hijos no se adaptaban bien al ambiente debido a las extremas diferencias culturales e idiomáticas por lo que terminamos retornando el año 1990.

Mientras me encontraba en el exilio mataron a mis amigos Manuel Guerrero y José Manuel parada, ambas excelentes personas.

A su retorno mis dos hijos tuvieron que recibir tratamiento psicológico ya que nunca pudieron tener una vida estable desde el ver como allanaban nuestro hogar hasta lo ocurrido en el exilio y sentirse como parias sociales. Mi mujer durante el exilio vivió con constantes estados depresivos sumados a los míos: recordando las torturas a las que había sido sometido el terror a ser asesinado era palpable, lo que importaba no poder comunicarme con mi familia por el horror de pensar que mis comunicaciones serían interceptadas y que vendrían por mi o por toda mi familia para asesinarnos.

Al volver a Chile intenté instalar un taller de imprenta pues era el único oficio que sabía desarrollar, cuestión a la que finalmente abdiqué por los recuerdos que aquello me generaba y que me provocaban un estado ansioso permanente que debí tratar con benzodiazepinas.

Las consecuencias de los horrores que sufrí son principalmente psicológicas y que se manifiestan en ansiedad, trastornos de sueño y estrés post traumático.

A veces, durante las noches, despierto gritando al recordar los golpes de corriente que recibí durante mi secuestro, debiendo mediarme de inmediato para poder intentar dormir. Sin mis medicamentos es imposible hacerlo.

Todo lo expresado en este libelo destruyó por completo mi proyecto de familia y de vida Vuestra Señoría, viéndome obligado a alejarme de muchos



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CLXXSXXXKE

de mis seres queridos y generándome daños que me acompañan hasta el día de hoy, sin jamás haya existido un responsable por todo ello.

Esa impunidad es la que agrava todo lo sufrido, el hecho de sentir que no existen responsables.

Hoy a mis 74 años tengo plena conciencia de que mis días en esta tierra están llegando a su fin, pero no quiero irme de aquí sin que se haga justicia por los tormentos a los que fui sometido los cuales cambiaron mi vida y me marcaron para siempre. Por esto que recurro a Vuestra Señoría a fin de pedir Justicia y Reparación que permitan pasar los últimos días de mi vida de manera decente, reparando de esta manera el daño que sufrí a manos de agentes del Estado.”

Como fundamentos de derecho, se refiere en primer término a la responsabilidad del Estado que lesionan los derechos fundamentales de las personas y causan los órganos de la administración, lo que está reconocido en la Constitución Política del Estado de 1980 y en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Al efecto, cita los artículos 1 inciso 4, 5, 6, 7, 19 N°1 y 3, y 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República; y el artículo 4 de la Ley N°18.575.

En cuanto a la Responsabilidad Constitucional del Estado por Crímenes en contra de la Humanidad. Imprescriptibilidad.

No es una responsabilidad contractual o extracontractual, como ha sostenido cierta doctrina. Los fundamentos de aquello se encuentran en los preceptos de la propia Constitución, en la naturaleza del hecho generador del daño y en la existencia de un marco internacional que lo regula expresamente.

Por su parte, la responsabilidad del estado en materia de crímenes de lesa humanidad (por tratarse de delitos que han sido cometidos sistemáticamente y violándose en su comisión derechos tan esenciales, como lo son los derechos humanos de la persona) han sido considerados como imprescriptibles por nuestros Tribunales Superiores de Justicia.

Los argumentos que justifican dicha imprescriptibilidad según la doctrina son, entre otros, los siguientes:

a. Existencia de estatutos diferentes regulatorios de distinta naturaleza. El Código Civil, que regula la prescripción civil, fue construido para regular las relaciones de responsabilidad entre los particulares entre sí, y de éstos respecto



del Estado, pero no para regular la responsabilidad internacional del Estado que se origina con la comisión de delitos en contra de la humanidad.

b. Existencia de un Principio de Derecho Internacional Especial, que establece el artículo 29 del estatuto de la Corte Penal Internacional. La norma no distingue entre las acciones civiles y penales, siendo entonces ambas imprescriptibles.

c. Seguridad Jurídica y la Falsedad de su Argumento en el caso sub-lite.

d. Por un Principio de Coherencia.

e. Enfoque centrado en las víctimas y en la humanidad.

f. Principio Finalista. La persecución de los crímenes de lesa humanidad tiene un fin preventivo.

g. Principio de la reparación integral. Este principio es un tema de vital importancia, ya que se traduce en un derecho para el afectado y una obligación para el infractor de los DD.HH., y se posiciona como el medio palpable de la represión de los crímenes contra la humanidad.

Considérese que la reparación integral presenta múltiples funciones: disuadir, sancionar, ejemplificar, y, sobre todo, restablecer el orden quebrantado cuando sea posible, o de una forma sustitutiva.

Respecto al Factor de Atribución de la Responsabilidad del Estado: Responsabilidad Objetiva, señala que como se ha fallado reiteradamente por nuestra Corte Suprema, para la determinación de la procedencia de la responsabilidad del Estado no es necesaria la acreditación del elemento subjetivo (dolo, o culpa), puesto que dichos elementos no pueden encontrarse en una persona sin sentimientos, como lo es el Estado o su administración (persona jurídica). Por lo que, para determinar entonces la procedencia de la responsabilidad estatal, el agraviado debe probar la existencia de daño o perjuicio provocado; y la actividad (o inactividad) del órgano del estado que lo genera, y desde luego la relación de causalidad.

En cuanto a la naturaleza del daño que se demanda, es un daño de índole moral, el que se divide usualmente en, daño moral como una lesión a los derechos extrapatrimoniales de una persona y otra, que considera al daño moral como equivalente al pretium doloris (esta última es la posición predominante en nuestros tribunales), por cuanto el daño moral consiste en el dolor, pesar o molestia que experimenta una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos. (Alessandri Rodríguez, A. (2005). De la



Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno. (1º. Ed) Santiago: Edit. Jurídica de Chile. P. 160). Señalado lo anterior, se hace necesario abordar diversas problemáticas, en cuanto a: la titularidad de la acción, la prueba del daño moral y la fijación del quantum indemnizatorio por daño moral.

En relación a la tendencia actual en materia de indemnización de daño moral por delitos de lesa humanidad, se ha generado un considerable cambio en la percepción de nuestros tribunales en torno al significado y la importancia de la reparación del daño moral causado en esta materia a raíz de la actuación de los agentes del Estado en tiempos de dictadura. Cita fallo del 3º Juzgado de Letras de Punta Arenas, Rol C-499-2017. La referida sentencia sigue una tendencia jurisprudencial reciente, y correcta al parecer de esta parte, que enfoca la evaluación del daño moral en la dimensión del daño ocasionado a la víctima y no en el mero tiempo de reclusión, por cuanto reducir el dolor y la angustia de las víctimas al período en que estuvieron detenidas implica desnaturalizar la presente acción. Ello, por cuanto el daño demandado no es la mera privación de libertad, sino la intensidad y la extensión de la lesión a los derechos humanos de las víctimas.

Indica, por lo demás que los actos cometidos por el Estado de Chile a través de sus órganos fueron actos terroristas a la luz de las normas del ordenamiento interno de Chile, como también aquellas de ius cogens. La conducta vulneradora de DDHH por parte de la demandada reviste un carácter terrorista, pues sin lugar a dudas persiguió generar sufrimiento físico y mental, con el claro fin de obliterar a todo aquel que fuere un opositor o se viere relacionado de alguna forma con éstos, e incluso en ocasiones a personas sin motivo alguno.

La causalidad se encuentra fehacientemente acreditada. De hecho, el mismo demandado Estado de Chile, le ha reconocido la calidad de víctima al incluirle en la nómina de personas reconocidas como víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Solicita, en definitiva: Se condene al Fisco de Chile a pagar a su representado la suma de \$300.000.000, por concepto de daño moral, más intereses y reajustes legales, desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total y, en subsidio de lo anterior, en la forma que SS determine, con costas.



En presentación de 19 de junio de 2024, la demandada contestó la demanda, solicitando su rechazo, con costas.

Opone en primer término la excepción de reparación integral. Improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante.

Señala que el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los derechos humanos se posiciona dentro de la llamada “justicia transicional”.

Agrega que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de la justicia por tantos años buscada. Lo anterior pues los procesos penales se concentran en el castigo a los culpables, no preocupándose del bienestar de las víctimas.

Desde la perspectiva del Estado, estas importan una compleja decisión de mover recursos económicos públicos desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos y este concurso de intereses se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación, los que incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos y otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero.

En el caso chileno, el gobierno de Patricio Aylwin se abocó preferentemente a una serie de objetivos de justicia transicional, entre los cuales estaba la provisión de reparaciones para los afectados. La Comisión Rettig en dicho sentido propuso una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Su informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente envió al Congreso y que derivó en la Ley N°19.123 que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, en cuyo mensaje se consignó en términos generales que se buscaba “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”.

En lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, el Ejecutivo siguiendo el Informe de la comisión, entendió por tal "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe". A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en



“un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Asumida esta idea reparatoria, la Ley N°19.123 y las demás normas conexas (como la Ley N°19.992 referida a víctimas de tortura) han establecido distintos mecanismos mediante los cuales concretar esta compensación, exhibiendo cómo nuestro país ha afrontado el complejo escenario de justicia transicional.

Al efecto, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha hecho principalmente a través de tres tipos de compensación: transferencias directas de dinero; asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y, simbólicas. Todas ellas buscan la reparación moral y patrimonial de las víctimas.

En cuanto a las transferencias directas de dinero, estas se han establecido a través de diferentes leyes, las que han significado al Estado altos costos generales, los que detalla en cuanto a pensiones por Comisión Rettig y Comisión Valech, bonos, desahucio y bonos extraordinarios, las que a diciembre de 2019 significaron el desembolso por parte del Fisco de \$992.084.910.400.

Desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual también es una forma de reparar un perjuicio actual. La sucesión de pagos por la vida del beneficiario no obsta a que pueda ser valorizada para conocer su alto valor compensatorio. Estas son una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige, obteniéndose compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Sobre las reparaciones específicas, da cuenta que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N°19.992 y sus modificaciones, que estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos, individualizados en el “Listado de Prisiones Políticos y Torturados”, de la nómina de personas reconocidas como tales.





Además, se refiere a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, como por ejemplo, se concedió a los beneficiarios de la Ley N°19.234 como de la Ley N°19.992 el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país, el que cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva para sus beneficiarios, con un incremento presupuestario constante.

Se incluyeron además beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores, siendo el organismo encargado de orientar para el ejercicio de este derecho la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.

Asimismo, se concedieron subsidios para el acceso a la vivienda.

Asimismo, parte importante de la reparación por daño moral causado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo, acciones que pretenden reparar a través de la satisfacción a las víctimas que en parte logre reparar el dolor y tristeza y con ello reducir el daño moral.

La doctrina se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente es dar a la víctima una ayuda o auxilio que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

En este sentido, se han ejecutado diversas obras de reparación simbólica: la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago en 1993, el establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido, el que se conmemora el 30 de agosto; la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros que detalla.

De lo expresado puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos han cumplido todos los estándares internacionales de justicia transicional y han provisto indemnizaciones acordes con la realidad económica nacional que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, morales y patrimoniales.

Por eso, las indemnizaciones solicitadas en autos y el cúmulo de reparaciones que aludió, pretenden compensar los mismos daños ocasionados



por los mismos hechos. No procede, por tanto, compensar dichos daños nuevamente. Así se pronunció la Corte Suprema en el fallo Domic Bezic, Maja y otros con Fisco, Rol 4.753-2001, lo que reiteró en fallo de 30 de enero de 2013.

En este mismo orden de ideas, se menciona el documento denominado “Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos” (Rule of Law for post-conflicts states) referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial.

En igual sentido, Lira da cuenta de lo problemático de dar lugar nuevamente a demandas de indemnizaciones de perjuicios, lo que genera un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación. El rechazo a estas pretensiones fortalece los programas de justicia transicional.

En segundo término, opone la excepción de prescripción extintiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil en relación con el artículo 2497 del mismo texto.

Entendiendo suspendida la prescripción durante el período de dictadura militar, por la imposibilidad de las víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, igualmente transcurrió el plazo de prescripción de 4 años contemplados en la norma citada.

En subsidio, opone la excepción respecto del plazo de 5 años contemplado para las acciones y derechos del artículo 2515 en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil, transcurrió con crecer el plazo contemplado en la primera de dichas normas.

Agrega que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que no existe en este caso.

Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin texto constitucional o legal expreso, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras.



Cabe recordar que la prescripción es una institución universal y de orden público.

Efectivamente, las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil y en especial las de su Párrafo I que la consagran se han estimado siempre de aplicación general y no solo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del Código Civil, que manda a aplicar estas normas de prescripción a favor y en contra del Estado.

Luego, cabe destacar que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tiene la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

Finalmente, añade que no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil en cuanto a la prescripción. Lo habría si aquellos textos la prohibieran o si el derecho interno no admitiera la reparación judicial oportunamente formulado. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que el demandante estuvo en situación de hacerlo.

Posteriormente, refiere sentencia de unificación de jurisprudencia de demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, de 21 de enero de 2013, autos Rol 10.665-2011, en la cual se dispuso que:

- El principio general que debe regir en la materia es el de prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad como toda excepción, debe ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva.

- Los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare la imprescriptibilidad de la responsabilidad civil, sino solo relativa a la responsabilidad penal.



- No existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que se representa en este caso por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, artículo 2332 que fija un plazo de 4 años desde la perpetración del acto.

- Que no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño.

Sobre el contenido patrimonial de la acción indemnizatoria que se ejerce, agrega que dicha acción cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté, como toda acción patrimonial, expuesta a extinguirse por prescripción.

Sobre el particular debe considerarse, como en forma reiterada se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece al ámbito patrimonial.

En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

En consecuencia, no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos debidamente incorporada al ordenamiento jurídico interno que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, no puede tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad en



materia penal, por lo que debe rechazarse la demanda de autos, al encontrarse prescrita la acción deducida.

En subsidio de lo anterior, formula las siguientes alegaciones sobre la naturaleza de la indemnización solicitada y del excesivo monto pretendido:

Sobre el daño moral, cabe considerar que este consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obran en autos en la etapa probatoria.

Los daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente.

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Por ende, su indemnización no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Es en esta perspectiva que hay que regular el monto de la indemnización, que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

No resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o demandado para fijar la cuantía de la indemnización.

No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, con absoluta prescindencia del obligado al pago. Las cifras pretendidas en autos resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado y los montos promedios fijados por los tribunales en esta materia.

En subsidio, alega que en todo caso la fijación del daño moral debe considerar todos los pagos recibidos a través de los años por el actor, conforme



a las leyes de reparación que señaló, que seguirá percibiendo a título de pensión, como también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, todos los que buscan reparar el daño moral.

De no accederse en estos términos, se produciría un doble pago por un mismo hecho.

Finalmente, hace presente que los reajustes solo pueden devengarse en caso de que la sentencia que se dicte acoja la demanda y establezca esa obligación, además de que se encuentre firme y ejecutoriada. Con anterioridad a ello, ninguna obligación de indemnizar tiene su parte, por lo que no hay suma que deba reajustarse.

Sobre los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

En presentación de 2 de julio de 2024 la demandante evacuó la réplica.

Hace presente que la demandada no ha controvertido los hechos plasmados en la demanda sin perjuicio de las excepciones que interpone para efectos de atacar el fondo de la acción deducida.

En cuanto a la excepción de reparación satisfactiva que se deduce, indica que los beneficios concedidos por el Estado de las Víctimas de Tortura no pueden ser concebidos como una indemnización de perjuicios, sino como un beneficio de carácter asistencial.

Respecto de la alegación subsidiaria de la demandada para efectos de considerar en la fijación del quantum indemnizatorio los pagos recibidos a través de los años conforme a las leyes de reparación, solicita que se rechace la alegación subsidiaria, toda vez que los beneficios concedidos no pueden ser concebidas como una indemnización ya que estos dineros no mantienen la misma identidad de los que se han solicitado en la demanda.

En cuanto a la prescripción de la acción que aquí se deduce, señala que el máximo tribunal también ha emitido pronunciamientos en torno a esta antigua problemática, hoy superada, de la imprescriptibilidad de la acción civil en los delitos de lesa humanidad, zanjando el asunto.

Por lo demás, la acción civil entablada, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CLXXSXXXKE

reparación completa, en virtud de lo ordenado en los artículos 5°, inciso segundo, y 6° de la Constitución Política de la República.

Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de sucesos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de este por la violación de una regla internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias del agravio. Fallo Corte Suprema, Rol 19.069-2018, de 20 de septiembre de 2018.

En cuanto a los reajustes e intereses, es en atención al especial marco regulatorio de los delitos de lesa humanidad que son fuente del daño en la presente causa, que corresponde condenar al Fisco de Chile al pago de la indemnización con reajustes e intereses. Así lo ha entendido la Ilma. Corte de Apelaciones de Concepción, en Fallo, Rol civil 716-2020.

Finalmente, en relación con el daño y el monto solicitado como indemnización indica que el daño alegado, así como otros detenidos necesariamente se mide en el tiempo por el cual se encontraron privados de libertad a manos de los Agentes del Estado. Sino que es necesario realizar una ponderación de todo lo ocurrido durante la prisión y tortura y no alegar de forma ligera que solo el tiempo determina el quantum indemnizatorio o para calificar el escenario más gravoso.

El 18 de julio de 2024, la demandada evacuó la dúplica, reiterando lo ya expuesto en su contestación.

Agrega en lo relativo a la excepción de reparación satisfactiva que el daño moral ya ha sido indemnizado, insistiendo sobre el esfuerzo que ha hecho el Estado para compensar el daño producido a las víctimas y en especial a las reparaciones recibidas por el demandante.

Sobre la prescripción, reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Corte Suprema de 21 de enero de 2013 en los autos Rol 10.665-2011.

La misma Corte Suprema ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales de derechos humanos no impiden en modo alguno la



aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil.

En cuanto a las alegaciones vertidas por el demandante relativas al monto demandado y los reajustes e intereses, da por reproducidos en forma expresa las alegaciones vertidas en la contestación de la demanda.

Por resolución de 22 de agosto de 2024 se recibió la causa a prueba.

Por resolución de 2 de diciembre de 2024 se citó a las partes a oír sentencia.

#### CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la detención ilegal y arbitraria y la tortura de personas ha sido catalogado como un crimen de lesa humanidad, esto es, están dirigidos a afectar la vida misma de las personas en su aspecto más básico y trascendente, del cual los países, entre los que se encuentra Chile, se han comprometido a evitar y, una vez producidos, sancionar. Siendo este caso de particular gravedad por cuanto no se encuentra discutido por la demandada que el demandante ha sido víctima de violaciones a sus Derechos Humanos, cometidos por agentes del Estado.

SEGUNDO: Que, a fin de acreditar su pretensión, el demandante acompañó la siguiente prueba documental:

A folio 19:

- copia documento “Norma Técnica Para la atención en salud de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973 - 1990”, emitida por la Subsecretaría de Salud Pública División de Prevención y Control de Enfermedades Departamento de Salud Mental.

- copia Resolución Exenta N°437 que aprueba la Norma General Técnica N°88, del Programa de Atención en Salud a las personas afectadas por la Represión Política ejercida por el Estado en el Periodo 1973-1990, de 30 de junio de 2006.

- documento “Características del daño y trauma en afectados directos de violaciones a los DDHH, realizado por el psicólogo Freddy Silva G. en su carácter de Coordinador de Equipo Especializado PRAIS del Servicio de Salud Aconcagua, de 16 de octubre de 2017.

- documento “Conferencia internacional Consecuencias de la tortura en la salud de la población chilena: Desafíos del Presente”, realizada por la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud con la colaboración de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CLXXSXXXKE



profesionales, representantes de equipos PRAIS, de las organizaciones no gubernamentales e instancias intersectoriales, de 21 y 22 de junio de 2001 en Santiago de Chile.

- documento “La Tortura Un Problema Medico”, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas en marzo de 1983.

- documento “Informe La Tortura, Modelo de Intervención”, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas en 2005.

- copia artículo “Represión política, daño transgeneracional y el rol del estado como agente reparador”, columna de opinión del psicólogo clínico Sergio Beltrán P. del Programa de Reparación Integral en Salud, del Servicio de Salud Araucanía Norte, publicado el 30 de junio de 2017.

- documento “Transgeneracionalidad del Daño”, realizado por el psicólogo Freddy Silva G. en su carácter de Coordinador de Equipo Especializado PRAIS del Servicio de Salud Aconcagua, de 16 de octubre de 2017.

A folio 20:

- copia Decreto N°158-73, de 9 de octubre de 1973, que crea una Comisión Especial para atender a los chilenos que, a consecuencia de los últimos acontecimientos políticos, se encuentran en grave necesidad económica o personal. Dicha comisión procurará dar asistencia jurídica, económica, técnica y espiritual, emitido por el Arzobispado de Santiago.

- copia Decreto N°5-76, de 1 de enero de 1976, que crea la Vicaría Episcopal de Solidaridad, emitido por el Arzobispado de Santiago y firmado por el arzobispo Raúl Cardenal Silva Henríquez.

- copia Decreto N°262, de 18 de agosto de 1992, para erigir la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, firmado por el arzobispo de Santiago Carlos Oviedo Cavada.

- copia Decreto N°270, de 18 de agosto de 1992, crea la Vicaría para la Pastoral Social, firmado por el arzobispo de Santiago Carlos Oviedo Cavada.

- artículo “La Vicaría de la Solidaridad 1976-1983. Poder, Solidaridad y Derechos Humanos en Chile”.

- artículo “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental” elaborado por la Vicaría de la Solidaridad y emitido por el Arzobispado de Santiago.



- artículo “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico - psiquiátrico”, de julio del año 1978, con un timbre del Arzobispado de Santiago.

- copia Capítulo I, la “Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico” del mes de julio del año 1980, documento sin título.

- artículo “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos” de abril de 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.

- artículo “Salud mental y Violaciones a los derechos Humanos”, de junio de 1989, suscrito por el equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad, integrado por los médicos Andrés Donoso, Guillermo Hernández y Ramiro Olivares, Aux. Enf. Janet Ulloa y Ps. Sergio Lucero, quien es el autor responsable.

A folio 21:

- documento Informe de la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura” (VALECH), comisión creada y publicada en el Diario Oficial bajo Decreto Supremo N°1.040 el 11 de noviembre de 2003, con la finalidad de establecer de manera rigurosa una lista de personas que hayan sufrido privación de libertad y tortura por razones políticas, así como entre otros factores, las consecuencias al ser sometido a condiciones de prisión política y de tortura tanto para la víctima como a sus familiares.

- documento Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo III y VIII.

A folio 23:

- documento “Nómina de personas reconocidas como víctimas”, emitida por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

- documento Página N°755 del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, autor Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, donde consta la calidad de demandante como víctima con el N°24921.

A folio 26: Informe Psicológico de daño Asociado a Violencia Política del demandante emitido por el Programa de Reparación y Atención Integral (PRAIS) perteneciente al Servicio de Salud Metropolitano Sur, en agosto de



2022, suscrito por la psicóloga Josefa Solís Martínez. Se realizó a través de una entrevista en profundidad al demandante, en ese entonces de 73 años. El informe describe la experiencia represiva de don Daniel, quien es detenido a finales de 1984 por agentes de la CNI quienes ingresan a su domicilio y en presencia de sus hijos, destruyen su taller y lo trasladan a un cuartel de la misma institución allí es sometido a privación de medios básicos, torturas como golpes, desnudamiento, aplicación de electricidad, finalmente luego de 5 días es llevado al Cuartel de Investigaciones desde donde es liberado. Don Daniel tuvo que salir al exilio junto a su familia retornando en el año 1990. Dichos eventos impactaron significativamente la vida de don Daniel, afectando su integridad física a largo plazo con secuelas que se mantienen a la actualidad, traumas psíquicos, emocionales y relacionales, teniendo que reformular sus planes de vida con una sensación constante de amenaza vital, se le imposibilita alcanzar metas personales, laborales y de ciclo de vida que tenía antes de los hechos. Se concluye que don Daniel presenta afectaciones y secuelas esperables en víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, se configura una Traumatización Extrema que repercute dinámicas interpersonales afectada su estabilidad psíquica, emocional y física.

A folio 27:

- documento Precalificación ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, a nombre al demandante, de 24 de mayo de 2004.

- documento Ficha de Ingreso ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, a nombre del demandante, de 24 de mayo de 2004.

- documento Datos de la Detención ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, a nombre del demandante, que indica que fue detenido en su domicilio en la comuna de Santiago, por personal de la CNI el 28 de noviembre de 1984, cuya fecha de libertad fue el 2 de diciembre de 1984.

- documento Antecedentes de Tortura ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, correspondiente al demandante, donde relata que durante su detención fue torturado con golpes de pies y puño, amenazas, aplicación de electricidad en diferentes partes del cuerpo, entre otras



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CLXXSXXXKE

torturas aplicadas. Se indica que el tiempo total de privación de libertad fue de 4 días. Del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 1984.

- documento Informe Mensual, noviembre 1981 ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, que indica la detención del demandante el 27 de noviembre de 1984 y sus circunstancias.

- copia de presentación de Recurso de Amparo, de 28 de noviembre de 1984, con un timbre ingreso en la Secretaría Criminal y en la parte final un timbre del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, en favor del demandante.

- copia de Certificado de la Fiscalía Militar ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, que certifica que el demandante don Daniel Luis Urzúa Blanco fue detenido por decreto exento N°4994, permaneciendo en dependencias de la Central Nacional de Informaciones, de 30 de noviembre de 1984.

A folio 28: Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH), Capítulo V.

A folio 29: Extracto de artículo digital del “Centro de Detención Cuartel Central Borgoño”, donde se encontró detenido al demandante, publicado por la página web Memoria Viva.

TERCERO: Que, por su parte, el demandado allegó ORD.: DSGT N°28.867/2024, de 5 de noviembre de 2024, emitido por don Alexander Suarez Olivares, Jefe de Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, dando cuenta que el demandante ha recibido \$41.217.471, por concepto de pensión Ley N°19.992; \$1.000.000, por concepto de aporte único Ley N°20.874; \$683.941, por concepto de aguinaldos. Actualmente recibe una pensión de \$290.413.

CUARTO: Que de los documentos acompañados, fluye que el actor fue detenido ilegalmente por agentes estatales en noviembre de 1984, permaneciendo bajo su custodia hasta el 2 de diciembre del mismo año, en que lo mantuvo privado de libertad, siendo sometido durante todo ese período a crueles torturas físicas y psicológicas que le causaron gran daño, con secuelas en su desarrollo emocional, lo que ha sido reconocido por el propio Estado como violaciones a los Derechos Humanos, circunstancias por las cuales se le ha dado el carácter de víctima en documentos oficiales.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CLXXSXXXKE

QUINTO: Que en cuanto a ser el actor beneficiario de la Ley N°19.992 que les otorgan una pensión, en efecto esta y otras reparaciones “simbólicas”, son reparaciones satisfactivas que emanan de los Principios y Directrices fijados por las Naciones Unidas en el año 2005, como estándares mínimos de reparación en su aceptación genérica, que están dirigidos a dar cuenta de constricción pública y apoyo inmediato a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, pero que no quedan agotados allí, al punto, que incluso la Corte Interamericana ha sostenido que las reparaciones pecuniarias pueden ser reclamadas al Estado, no obstante haber sido dirigidas acciones contra los responsables directos, por lo que parece atendible que no pueda impedirse, en primer lugar, el ejercicio de la acción de indemnización por daño moral a los tribunales ordinarios de justicia, más aún si las transgresiones que han dado origen a la pretensión reparatoria, se realizaron como acción de plan de gobierno contra civiles.

SEXTO: Que por lo demás, en el caso específico de que se trata, tampoco ha sido demostrado por la demandada que haya sido compensado el daño presuntamente generado, ni siquiera por acciones generales, ya que el solo hecho de haberse realizado por el Estado obras de carácter universal, no conlleva necesariamente la mitigación individual de los afectados.

SÉPTIMO: Que también se ha señalado por la demandada que la acción indemnizatoria se encuentra prescrita, por cuanto la detención arbitraria y tortura tuvieron lugar en 1984, y que aun cuando se estimara que el plazo debe contarse desde el retorno del gobierno democrático o desde el Informe de Verdad y Reconciliación, los 4 años que prescribe el artículo 2332 del Código Civil o incluso los 5 años del artículo 2515 del mismo cuerpo legal, habrían transcurrido largamente hasta la fecha de la notificación de la presente demanda civil, al Fisco de Chile, ocurrida el 29 de mayo de 2024.

OCTAVO: Que lo anterior sería de este modo si se atendiera a las normas de derecho privado, ya que en efecto desde la mirada positivista de resguardo del derecho de propiedad y la libre circulación de los bienes, es decir, desde la protección patrimonial, tanto al Fisco como a los privados, deben ser tratados en igualdad de condiciones y aplicársele la institución de la prescripción para adquirir bienes y extinguir deudas. Así lo señaló el propio Bello en el Mensaje del Código Civil, cuando expresa “Innovaciones no menos



favorables a la seguridad de las posesiones y al crédito encontraréis en el título De la Prescripción”.

NOVENO: Que, sin embargo, lo indicado, Chile forma parte de una comunidad internacional que ha establecido no solamente establecer en los instrumentos internacionales que los rigen, un beneficio mutuo como Estados contratantes, sino con un objeto y fin determinado, cual es “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independiente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre Derechos Humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción (...)”<sup>1</sup>. Lo anterior implica establecer en la base del análisis y aplicación del concepto de responsabilidad a la víctima y al principio Pro Persona, esto es, debiendo “preferir, privilegiar o favorecer la aplicación de aquella norma que otorgue una mayor protección a los derechos de la persona, independientemente si dicha norma se encuentra en un tratado internacional o en una disposición de derecho interno”<sup>2</sup>.

DÉCIMO: Que en efecto las Naciones Unidas aprobaron, en el año 2005, los Principios y Directrices relativos a los derechos de las víctimas en casos de violaciones a los Derechos Humanos y derecho internacional humanitario, señalando que debe darse a las víctimas una reparación plena y efectiva, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición.

UNDÉCIMO: Que entonces el imperativo de protección y reparación en casos de violación a los derechos humanos emana del derecho internacional y es un principio del Derecho Internacional Público “aplicable directamente en el sistema normativo nacional frente al incumplimiento de obligaciones internacionales y posee una base normativa de rango superior a la ley civil”<sup>3</sup>.

DUOÉCIMO: Que la Constitución Política de la República en su artículo 5 inciso 2° señala que “La soberanía reside esencialmente en la

---

<sup>1</sup> Corte IDH. OC-2/82, citado en Tratado Jurisprudencial de Derecho Administrativo. Responsabilidad Internacional del Estado en la Jurisprudencia Internacional y la Experiencia Chilena”, Tomo XVII. Claudio Nash, pág. 12.

<sup>2</sup> Op. Cit, pág. 13, cita propia de ponencia en el Centro de Estudios Constitucionales Universidad de Talca, septiembre de 2012.

<sup>3</sup> “Tratado Jurisprudencial de Derecho Administrativo. Responsabilidad Internacional del Estado en la Jurisprudencia Internacional y la Experiencia Chilena”, Tomo XVII. Claudio Nash Rojas, Pág. 134.



Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

DÉCIMO TERCERO: Que los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental disponen el principio de legalidad de los actos estatales, estableciendo expresamente la nulidad de aquellos que se aparten del mandato constitucional -y por aplicación del artículo 5 de los Tratados Internacionales- generando responsabilidad y sanciones.

DÉCIMO CUARTO: Que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, establece en su artículo 1 que estos “son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”.

DÉCIMO QUINTO: Que a su vez el Convenio de Ginebra sobre tratamiento de los Prisioneros de Guerra, señala en su artículo 29 que “las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente. Cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una quiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones provistas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio. Los inculcados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de



garantías de procedimiento y libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del presente Convenio.”

A su vez, el artículo 130 expresa que “Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un prisionero de guerra a servir a las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarlo de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio.”

Y el artículo 131 establece “Ninguna Parte Contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra Parte Contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma y otra parte Contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo anterior”.

DÉCIMO SEXTO: Que la Convención Americana de los Derechos del Hombre en su artículo 1 prescribe que “Los Estados Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano”.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, por último, la Convención de Viena sobre los Derecho de los Tratados, indica en su artículo 27 en cuanto al derecho interno y la observancia de los tratados, que “Una Parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”.

DÉCIMO OCTAVO: Que la obligación de reparación íntegra entonces emana de la aplicación preferente al derecho internacional de los Derechos Humanos para cumplir los compromisos que el Estado chileno ha contraído y aplicar dichos tratados de buena fe<sup>4</sup>. Normas internacionales que son de “aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5 de la Constitución Política de la República, por sobre

---

<sup>4</sup> Op. Cit. Pág. 161





aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían aludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno y que invoca el Consejo de Defensa del Estado en resguardo de los intereses fiscales (...)»<sup>5</sup>.

**DÉCIMO NOVENO:** Que en este caso se trata entonces de crímenes de lesa humanidad en que las acciones de reparación integral no han prescrito, puesto que la condición de imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria en este caso, emana de la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos a la luz de los principios generales del derecho internacional que tiene rango supra legal, por aplicación del artículo 5 de la Constitución Política de la República, ya citado; sin que pueda invocarse derecho interno de menor jerarquía para desatenderlas, por lo cual también las alegaciones principal y subsidiaria de prescripción de la acción de responsabilidad serán desestimadas.

**VIGÉSIMO:** Que conforme se ha probado y reconocido, las acciones delictuales fueron cometidas por agentes del Estado; siendo su actuar una contravención directa a las normas del derecho internacional y los principios constitucionales de los artículos 6 y 7.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que el artículo 38 de la Constitución Política de la República señala que “Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.

Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, de esta manera, encontrándose acreditado el ilícito, la responsabilidad del Estado y la circunstancia de que la detención y tortura de la víctima, no habría tenido lugar si la intervención de funcionarios estatales no se hubiera producido, solo queda dar por establecida la responsabilidad del Estado de Chile en los apremios físicos y psicológicos infligidos al actor.

---

<sup>5</sup> Caso Álvaro Corvalán Castilla con Fisco de Chile.



VIGÉSIMO TERCERO: Que la responsabilidad trae consigo la indemnización de los perjuicios causados, reparación que se ha solicitado en relación con el daño moral sufrido por el demandante.

VIGÉSIMO CUARTO: Que para acreditar el daño moral sufrido se tendrá en cuenta los informes allegados que se refiere a las afectaciones físicas y emocionales sufridas por el demandante, producto de los hechos delictuales cometidos por agentes del Estado y que han permanecido luego de más de 40 años de ocurridos los hechos.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, en cuanto al monto de la indemnización, se estará a la circunstancia de que los hechos que causan el agravio han influido negativamente en el desarrollo emocional, laboral y social del demandante; razón por la cual se le fijará prudencialmente en la suma de \$70.000.000, sin que ello aparezca que se trata de un enriquecimiento sin causa o un lucro improcedente, como pudiere alegar la demandada.

VIGÉSIMO SEXTO: Que las referidas cantidades ordenadas pagar, se hará con el reajuste del Índice de Precios al Consumidor desde que la sentencia quede ejecutoriada hasta su pago efectivo, puesto que, en efecto, la obligación de indemnizar es declarada con la dictación de esta sentencia y el reajuste tiene como único objeto morigerar los efectos de la inflación.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, por haber tenido motivo plausible para litigar, el Fisco no será condenado en costas.

En consecuencia y visto además la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; Convenio de Ginebra sobre tratamiento de los Prisioneros de Guerra; Convención Americana de Derechos Humanos; Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados; artículos 5, 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República, artículo 4 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado; Leyes N°19.123 y N°19.980; y, artículos 144, 170 y 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

I.- Que se rechazan las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva.

II.- Que se acoge la demanda y se dispone que el Estado de Chile debe pagar como indemnización de perjuicios por daño moral al demandante la suma de \$70.000.000 con los reajustes que se indican en el considerando vigésimo sexto.



III.- Que cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en Santiago, trece de enero de dos mil veinticinco.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CLXXSXXXKE